

Urge estrategia de protección

Exigimos al Gobierno garantías y seguridad para el adecuado desempeño de la función periodística.

Por: Ileana Alamilla

Malos augurios se han presentado estas últimas semanas para la prensa guatemalteca: la agresión brutal contra Alberto Cardona, reportero de Guatevisión, por miembros de una empresa de seguridad privada en la cobertura de un evento musical y los ataques y amenazas a Mario René Escobedo, corresponsal de El Quetzalteco, quien se encontraba en el ejercicio de su función periodística, por un oficial de la Policía Nacional Civil.

Estas señales son alertas que deben llamar al gremio a una reflexión colectiva para diseñar una estrategia única que nos permita visualizar los riesgos oportunamente y exigir la acción pública correspondiente para romper la impunidad y garantizar la seguridad de los trabajadores de la prensa.

En estos casos, los responsables están identificados, lamentablemente son parte de las fuerzas de seguridad y de poderes fácticos como ya lo son las empresas de seguridad privadas. Es entonces el turno de la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas de actuar para que estas violaciones a la ley sean debidamente juzgadas y sancionadas.

Queda más que demostrado el uso abusivo del poder en manos de funcionarios del Estado y de empleados de empresarios dedicados a prestar "seguridad". Es inadmisibles que los responsables de la seguridad no tomen medidas disciplinarias para evitar las acciones agresivas de sus elementos, quienes irónicamente están llamados a garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos.

Durante los tres años anteriores y los tres primeros meses del presente año, la cifra de violaciones al derecho de emisión del pensamiento asciende a 171, la mayoría fueron amenazas y agresiones, tanto verbales como físicas; también hay un elevado número de restricciones a la información.

Todos estos casos permanecen en la impunidad. No hay avance en las investigaciones, ni condenas por tales hechos.

El Gobierno ha reconocido la dificultad de atender tanta amenaza contra la ciudadanía, lo que se agrava por el inmenso control que tienen los poderes paralelos sobre la institucionalidad del Estado.

El ambiente preelectoral, violento e inseguro en el que nos desenvolvemos, presenta un escenario impropio para ejercer las libertades de expresión y opinión. Las acciones denunciadas evidencian que de no tomar medidas drásticas y oportunas, además de los daños irreversibles a los y las periodistas, se puede socavar la frágil democracia y provocar fracturas irreparables para el proceso.

Exigimos al Gobierno garantías y seguridad para el adecuado desempeño de la función periodística. Nos negamos a aceptar la lógica de la impunidad.

Guatemala, 07 de junio de 2006.